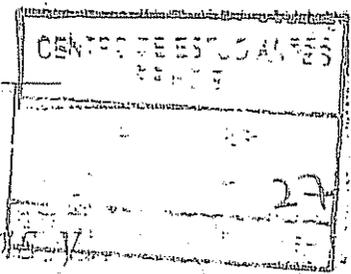


ORIGINAL

HISTORIA
PRACTICO

III



Sindicatos, burócratas y
movilización

por DANIEL JAMES

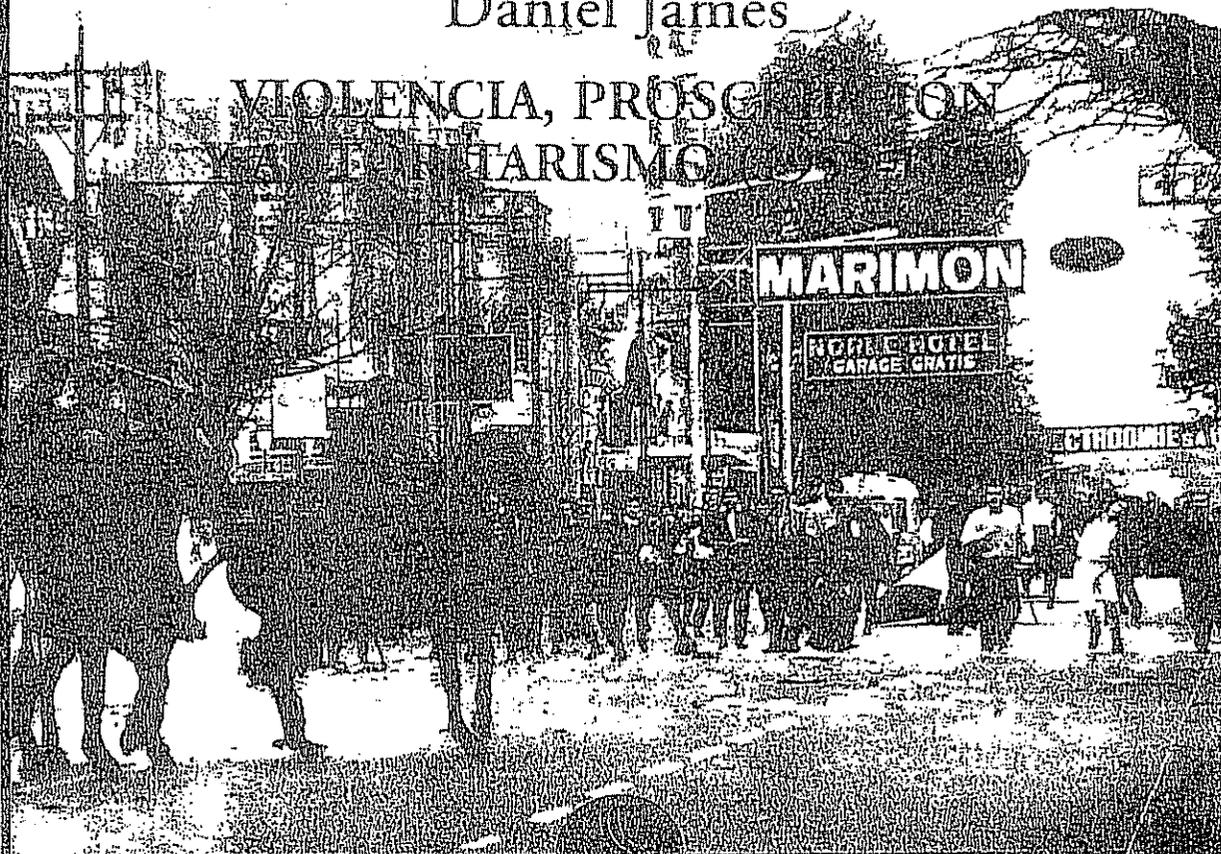
1



HISTORIA ARGENTINA

DIRECCIÓN DE TOMO

Daniel James



Editorial Sudamericana



"NI VENCEDORES, NI VENCIDOS." EL PRIMER INTENTO DE CONSTRUIR UN ORDENAMIENTO POSTERIOR A PERÓN ENTRE LOS SINDICATOS Y EL ESTADO

En su discurso de asunción, pronunciado el 23 de septiembre de 1955 tras la jura como nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi anunció que en la Argentina posperonista no había "ni vencedores, ni vencidos". Su intención era, sobre todo, tranquilizar a la masa de trabajadores peronistas preocupados por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas con Perón y de las organizaciones sindicales que las garantizaban. La lógica subyacente a la política de Lonardi con respecto al movimiento sindical peronista era clara. El presidente y sus partidarios dentro del gobierno provisional estaban dispuestos a admitir que los peronistas siguieran controlando los sindicatos. Su única salvedad era que debía tratarse de un peronismo purificado de



GRANDE
IRAE

ANDINO
CIABA
FIRAE

DIT

ASO
EN
SO

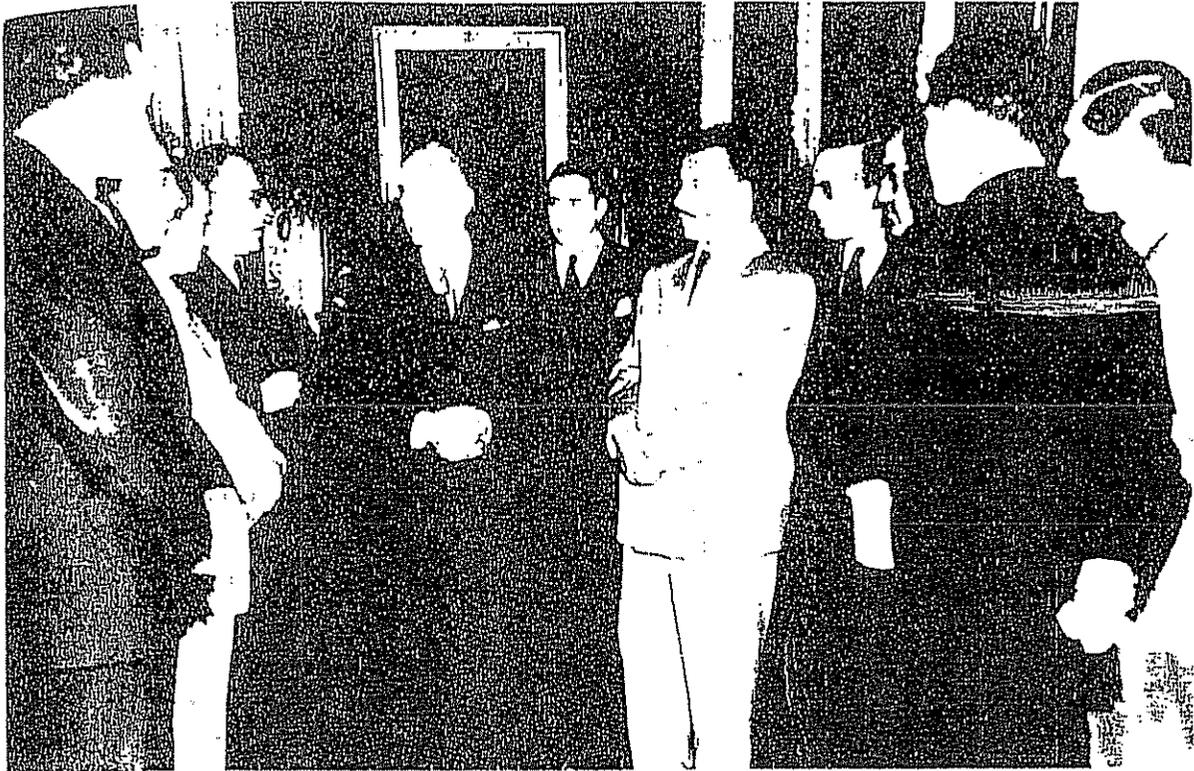
Acto de las obreras de la... en Plaza Miserere 1967

los vicios que lo habían corrompido y conducido a la derrota.

El ala nacionalista de la oposición a Perón coincidía con mucho de lo que se había logrado. Para ellos, el peronismo representaba un baluarte contra el comunismo. La cuestión tenía que ver, en esencia, con los límites y los excesos. Si los gremios reconocían la necesidad de mantenerse dentro de su propia esfera y la demagogia corrupta de los elementos más estrechamente asociados a Perón podía eliminarse, los sindicatos conducidos por los peronistas tendrían un papel crucial en la Argentina posperonista como órganos de control social y canales de expresión de la clase obrera. Luis Cerruti Costa, el ministro de Trabajo, adoptó en consecuencia una política de avenencia con la conducción gremial peronista. La CGT quedó en manos de ésta; lo mismo que, en un inicio, muchos de los grandes sindicatos.

El intento de Lonardi de llevar a la práctica esta política fracasaría a mediados de noviembre, y el primer mandatario sería reemplazado por su vicepresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del campo militar antiperonista de línea dura. Varias razones explicaban ese fracaso. La posición de Lonardi era minoritaria entre los militares y las fuerzas cívicas que habían llevado a cabo la Revolución Libertadora. El grupo dominante dentro del campo antiperonista consideraba el peronismo como una calamidad que era preciso exorcizar de todos los sectores de la sociedad argentina. Les preocupaba en especial la autoridad peronista sobre la clase obrera. En armonía con esta línea de pensamiento, grupos armados de antiperonistas se habían apoderado de muchos sindicatos en las semanas siguientes al golpe. Estos grupos eran conocidos como "comandos civiles" y estaban compuestos principalmente por activistas socialistas y radicales que habían desempeñado un destacado papel en la rebelión contra Perón. Se veían a sí mismos como una milicia civil que actuaría como un bastión contra la amenaza de un resurgimiento peronista.

De tal modo, mientras Lonardi y su ministro de Trabajo procuraban concertar con la conducción gremial peronista un compromiso que posibilitara una continuidad modificada de la situación laboral previa a septiembre, los antiperonistas intensificaban sus ataques a los locales sindicales e instaban a sus partidarios dentro del gobierno provisional a efectuar una



El general Lonardi con sindicalistas. En el extremo derecho, Augustó Vandor.

completa purga de la influencia justicialista en los gremios. Como resultado de esa situación, la conducción peronista de la CGT, encabezada por Andrés Framini y Luis Natalini, comenzó a dudar cada vez más, si no de las intenciones, sí al menos de la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas de cumplir sus promesas. Lo cierto era que el sector nacionalista del gobierno provisional no tenía la autoridad suficiente dentro de la policía o las Fuerzas Armadas para impedir los ataques antiperonistas y la toma de locales u oponerse al arresto de una creciente cantidad de funcionarios sindicales peronistas de nivel medio.

En este contexto de tensión y recelos en aumento, surgió otro actor, como figura crucial en la resolución del interregno de Lonardi. Las bases gremiales peronistas, en un principio aturcidas por el golpe contra Perón, habían demostrado en los dos meses siguientes una creciente disposición a resistir y preservar "algo que por instinto sentían estar perdiendo". Gran parte de esa resistencia dejó a un lado a la conducción sindical

peronista. El 1.º de octubre y una vez más a comienzos de noviembre se produjeron huelgas espontáneas en gran escala como protesta por la situación nacional en general y los ataques antiperonistas contra los sindicatos en particular. A su turno, esto alarmó y fortaleció a los elementos más duros de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles e hizo aún más difícil para Lonardi dar el tipo de concesiones que podrían haber tranquilizado a las bases peronistas.

La CGT convocó a un paro general para el 14 de noviembre con el fin de protestar contra la asunción del nuevo régimen. Pese a un considerable apoyo entre las bases, las nuevas autoridades reprimieron eficazmente la medida y el 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos sus sindicatos miembros y detuvo a muchos dirigentes.

El interregno de Lonardi, en consecuencia, puso de relieve la existencia de una conducción sindical peronista que estaba profundamente confundida y sacudida por acontecimientos que le costaba entender y le era imposible controlar. Al mismo tiempo, la clase obrera peronista había comenzado a exhibir una firme voluntad de defender sus sindicatos. Esta voluntad sería un factor crucial en el desarrollo de las relaciones entre los gremios, los trabajadores y el régimen militar en el período siguiente.

EL GOBIERNO DE ARAMBURU, LA RESISTENCIA OBRERA Y LA SUPERVIVENCIA DEL PERONISMO

El nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aramburu y el vicealmirante Isaac Rojas se dispuso a abordar de inmediato lo que para ellos era un problema nacional decisivo: la persistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina. Según su criterio, el peronismo era una aberración que era preciso borrar de la conciencia nacional. En la esfera de la clase obrera y sus instituciones, esto significaba varias cosas. En el nivel más concreto, las autoridades intentaron proscribir a toda una generación de funcionarios gremiales peronistas. El decreto 7.107 excluyó de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1951 y septiembre de 1955, así como a quienes eran indagados

por una comisión especial creada para investigar los delitos e irregularidades cometidos por los funcionarios justicialistas. De manera similar, quedaron proscriptas todas las actividades políticas peronistas.

Al mismo tiempo, esta ofensiva antiperonista se extendió a la base fabril. Inmediatamente después de la intervención de la CGT en noviembre de 1955, el Ministerio de Trabajo del nuevo régimen declaró disueltas todas las comisiones internas de delegados. A principios de 1956, por lo tanto, la situación sindical había cambiado radicalmente. La CGT estaba bajo el control de un interventor militar, el capitán Patrón Laplacette, que sería asistido por un consejo asesor de figuras antiperonistas de la época anterior a 1945. Además de la detención de muchos miles de funcionarios justicialistas de alto y mediano rango y de la proscripción de varios millares de ex activistas, se habían designado interventores militares y antiperonistas en todos los sindicatos. El sueño del gobierno militar y sus asesores civiles era que, luego de una etapa de necesaria purga, el terreno quedara despejado para la elección de dirigentes gremiales verdaderamente "democráticos".

El sueño se demostraría irrealizable. Hacia 1957 el gobierno terminaría por reconocer que no había logrado borrar la influencia peronista. Las raíces de este fracaso residen en la naturaleza de las políticas del gobierno militar y en la virulencia de su ofensiva antiperonista. El régimen estaba decidido a llevar esa ofensiva al nivel más elemental de la experiencia obrera en el proceso de producción. El decreto 2.739 autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como "obstáculos a la productividad". Junto con el ataque a las comisiones internas, la cuestión de esos "obstáculos" se convertiría en una piedra de toque crucial en la mente de los trabajadores, a través de la cual éstos podrían apreciar las consecuencias concretas del cambio de autoridad política nacional para su vida laboral.

Para la patronal y el gobierno la cuestión era fundamental. La industria argentina se caracterizaba por una situación de hecho que daba a las comisiones internas un amplio margen de control del proceso productivo. Éste era el legado de la posición singular del movimiento sindical dentro del peronismo y se había incorporado a los convenios colectivos firmados entre 1946 y 1948. Este poder de la base fabril impedía eficaz-

mente la implementación de nuevos ordenamientos laborales racionalizados que podían incrementar la productividad del trabajo. El intento del nuevo gobierno y de los empleadores de transformar esta situación chocó con una resistencia generalizada de los trabajadores, arraigada en el desarrollo de una cultura fabril específica durante la era peronista. Esa cultura traducía la nueva posición social y política de los trabajadores dentro de la sociedad argentina en una serie de supuestos y afirmaciones concernientes a lo que la patronal podía y no podía demandar legítimamente a su personal. Para los trabajadores, las prácticas y disposiciones que los empleadores y el Estado ahora consideraban tan objetables eran una salvaguardia crucial de la calidad de vida en las fábricas. Como tales, eran emblemáticas de un aspecto decisivo del significado de la experiencia peronista para la clase obrera: la letra menuda de la realidad cotidiana que subyacía a las abstracciones más vagas de la retórica justicialista.

Para defenderse a sí mismos del ataque contra los sindicatos y las condiciones fabriles, los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontánea y localizada que la cultura política peronista llegaría a conocer como "la resistencia". Frecuentemente cimentada en comités de base, extraoficiales y con una diversidad de formas de accionar que iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores, esta lucha confirmó la dominación peronista de la clase obrera. Cuando el gobierno convocó a elecciones para reconstituir las comisiones internas a fines de 1956, en la mayoría de los casos fueron elegidos delegados peronistas.

No hubo, entonces, un momento de vacilación en lo que se refiere a la lealtad al peronismo. Ni socialistas ni comunistas pudieron desafiar eficazmente esa fidelidad. El gobierno de Aramburu y Rojas, con sus ataques a las comisiones internas, su generalizado revanchismo en la base fabril y la ofensiva contra las condiciones laborales, expresaba con mucha claridad para los trabajadores lo que estaba en peligro de perderse y el contraste con la época de Perón. De ese modo, reforzaba la identificación de Perón y el peronismo con las experiencias obreras concretas.

Las luchas defensivas de 1956 y 1957 pusieron en primer plano una nueva camada de dirigentes gremiales más jóvenes

que llenaron el vacío generado por la proscripción de la generación anterior a 1955. Esta nueva generación tenía estrechos lazos con las bases y disfrutaba del prestigio que se desprendía de la dureza y las penurias del activismo sindical en esos años.

Dos serían los principales desafíos que estos dirigentes enfrentarían en 1957 y 1958. El primero era negociar eficazmente con la patronal y las autoridades nacionales, para lograr expandir y consolidar los espacios institucionales que se les concedían a regañadientes. Hacia fines de 1956 varios sindicatos volvían a estar a cargo de gremialistas peronistas luego de celebrar elecciones; otros se les sumarían en 1957, cuando el régimen terminó por reconocer la inevitabilidad de una constante y fuerte presencia peronista. Algunos de los gremios normalizados, tanto peronistas como no peronistas, formaron la Comisión Intersindical a principios de 1957. Este organismo convocaría a varias importantes huelgas en el transcurso de ese mismo año. Más adelante, siempre en 1957, el interventor militar de la CGT llamó a un congreso normalizador. Los socialistas y otros antiperonistas controlaban sindicatos como los

"Instrucciones Generales Para los Dirigentes" del Comando Superior Peronista

"Plan de Acción

"La idea operativa es la siguiente:

- "1. Resistencia civil por las fuerzas cívicas y sindicales organizadas.*
- "2. Mientras se realiza la resistencia, debe activarse la organización y perfeccionar lo existente en forma que (...) la resistencia se extienda a todo el país.*
- "3. Cuando el desgaste sea suficiente y la organización adecuada se paralizará el país, tentado una decisión final.*
- "4. Para el caso de que aun paralizado el país, la canalla resistiera (...) deben irse preparando los medios para descargar la guerra de guerrillas en todas partes. Para esa ocasión debe contarse con las fuerzas del Ejército, Gendarmería, Policía, etc., que se encuentren en acuerdo con nosotros (...)"*

Fuente: Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

de empleados de comercio, bancarios, personal civil de la nación y empleados municipales. Cuando estos gremios se vieron en minoría, abandonaron el congreso y constituyeron los 32 Gremios Democráticos. Los restantes sindicatos, peronistas en su abrumadora mayoría, formaron entonces las 62 Organizaciones. La creciente división de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, que el régimen militar había esperado convertir en cosa del pasado, encontraba de ese modo expresión institucional dentro del movimiento sindical. Las 62 Organizaciones representaron para los gremialistas peronistas la primera organización justicialista completamente legal desde el derrocamiento de Perón, y la utilizarían para coordinar su accionar y presionar al gobierno tanto en el campo sindical como en la esfera política más general. En rigor de verdad, ése era precisamente el segundo gran desafío que enfrentaba la nueva generación de dirigentes gremiales.

El término "resistencia", que fue un punto crucial de referencia en la cultura política peronista, significaba algo más que la mera alusión a la defensa de las condiciones y la organización dentro de las fábricas. En el folclore del movimiento, la resistencia fabril estaba estrechamente asociada a la resistencia en otros terrenos. En la conciencia popular peronista la resistencia evocaba un conjunto diverso de respuestas que iban desde la protesta individual, a través del sabotaje personal y actividades clandestinas más organizadas, hasta el intento de levantamientos militares. La meta última de esta gama de acciones se sintetizaba en la consigna "Perón vuelve". Muchos activistas peronistas concebían la resistencia desde un punto de vista insurreccional. El exponente más consumado de esta perspectiva era el delegado personal de Perón en esos momentos, John William Cooke (véase el capítulo VIII).

Para muchos militantes, el dilema radicaba en el hecho de que el éxito mismo de la resistencia en los sindicatos estaba cambiando el contexto dentro del cual debía actuar el movimiento. El gobierno se retiraba y abría posibilidades de actividad legal dentro de las estructuras existentes. No obstante, en el movimiento eran muchos los que rechazaban esa opción táctica, porque dejaba a un lado el derrocamiento del régimen y el retorno de Perón. El punto focal de esta tensión se centró en las elecciones presidenciales convocadas para febrero de 1958.

Arturo Frondizi había cortejado abiertamente al peronismo para obtener su voto. Para los dirigentes sindicales peronistas, apoyar su candidatura era una opción con muchos atractivos. Frondizi había prometido la reconstitución de la CGT, había impulsado la convocatoria de elecciones en todos los sindicatos aún no normalizados y era partidario de la vuelta a un fuerte sistema de negociaciones colectivas basado en sindicatos nacionales centralizados, de acuerdo con la estructura existente durante el régimen de Perón. El contraste con el gobierno militar parecía evidente. Este último había emitido el decreto 9.270, que garantizaba la representación de las minorías en la conducción sindical y el reconocimiento de varios sindicatos con iguales derechos de negociación en una misma rama industrial, y había prohibido toda actividad gremial que se definiera como política.

En este contexto, el llamado de muchos sectores de la resistencia a abstenerse o votar en blanco tenía poco que ofrecer a los activistas sindicales de las 62 Organizaciones. En cambio, una victoria del candidato "no continuista", Frondizi, contribuiría a consolidar las posiciones que habían arrancado al régimen militar. Ésa fue la lógica que Perón aceptó al ordenar a sus seguidores que votaran por el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente en las elecciones de febrero de 1958.

LOS AÑOS DE FRONDIZI: LA LÓGICA EMERGENTE DEL PRAGMATISMO INSTITUCIONAL

El gobierno de Arturo Frondizi disfrutó de una tregua inestable con los sindicatos durante sus primeros ocho meses en el poder. Las bases peronistas, en particular, habían salido del régimen militar con una confianza muy robustecida en sus propias fuerzas, fundada en su comprobada capacidad de sobrellevar la represión militar y recuperar los sindicatos. Esta elevada autoconfianza se reflejaba en una sostenida oleada de militancia. Alentados por la nueva situación institucional representada por un presidente que debía ese cargo a sus votos, los trabajadores peronistas lanzaron una cantidad creciente de huelgas. Sólo en la Capital Federal, en 1958, se perdieron más de seis millones de horas de trabajo a causa de esas medidas de fuerza.

Al mismo tiempo, Frondizi cumplió una de sus principales promesas de campaña y sancionó la ley 14.455, de asociaciones profesionales, que en muchos aspectos se basaba en el Código del Trabajo peronista. Esta ley permitía el reconocimiento de una sola entidad negociadora en cualquier rama industrial y de ese modo daba por terminado el intento del régimen de Aramburu de implementar una negociación con varios sindicatos por rama. La nueva ley también abolía la representación de las minorías en la conducción sindical, otra característica de la política gremial del gobierno militar. Se restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato. También se autorizaba a los empleadores a retener la cuota gremial de sus trabajadores por cuenta y orden de los sindicatos. Las elecciones realizadas en muchos sindicatos de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley dieron por resultado el triunfo de las listas peronistas en todos los gremios industriales de importancia. Para terminar, Frondizi prometía el restablecimiento de la CGT una vez que se completara ese proceso electoral.

La promesa de estabilidad en el frente laboral que parecían brindar esos primeros meses se disipó rápidamente. En enero de 1959 Frondizi, luego de negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de emergencia, anunció un plan de estabilización que reducía de manera drástica las protecciones arancelarias, devaluaba el peso, aumentaba la mayoría de los precios controlados y prometía un virtual congelamiento salarial. Parte del acuerdo también implicaba la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. La respuesta del movimiento obrero a estas medidas iba a conducirlo a una serie de encarnizadas acciones defensivas en el transcurso de 1959 y 1960. La primera de ellas fue la ocupación del mencionado frigorífico por su personal para protestar contra el decreto de privatización. De hecho, en 1959 se perdería una cantidad sin precedentes de días de trabajo a causa de las huelgas, emprendidas por los trabajadores para defenderse del impacto del plan económico de Frondizi. A corto plazo, las medidas gubernamentales envenenaron las relaciones laborales. Tanto los sindicatos peronistas como los no peronistas se encontraban en una situación desventajosa al enfrentarse con un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas y dispuesto a usar el poder del Estado

**John William Cooke evalúa para Perón la actuación
de los dirigentes sindicales ante la huelga general
decretada en solidaridad con los trabajadores del
Frigorífico Lisandro de la Torre**

"(...) pero mantienen su gravitación los dirigentes importantes: Vandor, Olmos, Framini... el equilibrio de fuerzas y la gravitación de los dirigentes de primera categoría no parecen haberse alterado después de los episodios recientes. Vandor, detenido el día domingo de la huelga, aparece encabezando el sector más duro y tiene, además de sus méritos personales, la fuerza de contar con la solidaridad de su gremio, ratificada en una asamblea general realizada (...)"

Fuente: Carta de Cooke a Perón, 5 de febrero 1959, Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

para sostener su política económica. Muchos gremios volvieron a ser intervenidos durante 1959. La lucha también era desigual porque, con la aguda recesión provocada por el plan de estabilización, la posición negociadora de los sindicatos había quedado muy debilitada. El resultado fue una serie de derrotas que desmovilizaron y pusieron a la defensiva al movimiento obrero. En 1960 y 1961 la cantidad de huelgas declinó drásticamente.

Los sindicatos peronistas experimentaron estos acontecimientos como una traición. A corto plazo los sucesos señalaron, sin duda, el fin de cualquier posibilidad inmediata de implementar el programa económico desarrollista, basado en una alianza nacional policlasista con inclusión de una fuerte presencia sindical. Para muchos peronistas, la "traición" de Frondizi era una prueba de que su renuencia con respecto a la decisión original de apoyarlo estaba bien fundada. Frondizi pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en el gobierno tratando de convencer a los dirigentes gremiales peronistas de su buena fe y su compromiso permanente con las ideas de desarrollo "nacional y popular".

Es importante subrayar la complejidad de la situación que enfrentaba la mayoría de los sindicalistas —tanto peronistas

como no peronistas— en esos tiempos. Para los peronistas, en particular, el atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras. Existía, por cierto, un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había además muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente. De tal modo, los dirigentes gremiales se veían en la necesidad de considerar seriamente el efecto de sus acciones sobre la supervivencia del gobierno frondizista. Y estaban muy al tanto de las presiones militares antiperonistas sobre el presidente.

De igual importancia, sin embargo, era lo que podríamos llamar una afinidad ideológica subyacente entre concepciones clave del desarrollismo y ciertos dogmas fundamentales de la ideología justicialista formal. La retórica desarrollista e industrialista de Frondizi abrevaba en una tradición de larga data del nacionalismo económico argentino que incluía al peronismo. Aun la tardía adhesión del presidente a la idea de la importancia de los capitales extranjeros podía encontrar un precedente en algunas políticas de los últimos años de Perón (el contrato con Standard Oil y el acuerdo con Kaiser Industries). El desarrollismo también compartía con el peronismo ciertas concepciones básicas sobre los beneficios de la armonía social y la humanización de las relaciones entre capital y trabajo. Más específicamente, Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes, cooperaran con otros “factores de poder” como la Iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntaló las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores. El hecho mismo de que los sindicalistas consideraran como una “traición” las políticas del presidente en 1959 indica una persistente creencia en la eficacia de las ideas traicionadas. La búsqueda de una u otra versión de este proyecto de desarrollo iba a ser un fundamento estable de la actividad política y social de los sindicatos peronistas a lo largo de la década siguiente. Frondizi y sus partidarios argumentarían que el plan de estabi-

como no peronistas— en esos tiempos. Para los peronistas, en particular, el atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras. Existía, por cierto, un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había además muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente. De tal modo, los dirigentes gremiales se veían en la necesidad de considerar seriamente el efecto de sus acciones sobre la supervivencia del gobierno frondizista. Y estaban muy al tanto de las presiones militares antiperonistas sobre el presidente.

De igual importancia, sin embargo, era lo que podríamos llamar una afinidad ideológica subyacente entre concepciones clave del desarrollismo y ciertos dogmas fundamentales de la ideología justicialista formal. La retórica desarrollista e industrialista de Frondizi abrevaba en una tradición de larga data del nacionalismo económico argentino que incluía al peronismo. Aun la tardía adhesión del presidente a la idea de la importancia de los capitales extranjeros podía encontrar un precedente en algunas políticas de los últimos años de Perón (el contrato con Standard Oil y el acuerdo con Kaiser Industries). El desarrollismo también compartía con el peronismo ciertas concepciones básicas sobre los beneficios de la armonía social y la humanización de las relaciones entre capital y trabajo. Más específicamente, Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes, cooperaran con otros “factores de poder” como la Iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntaló las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores. El hecho mismo de que los sindicalistas consideraran como una “traición” las políticas del presidente en 1959 indica una persistente creencia en la eficacia de las ideas traicionadas. La búsqueda de una u otra versión de este proyecto de desarrollo iba a ser un fundamento estable de la actividad política y social de los sindicatos peronistas a lo largo de la década siguiente. Frondizi y sus partidarios argumentarían que el plan de estabi-

lización fue una necesidad temporaria y que las concesiones al capital extranjero eran imprescindibles para romper las ataduras del subdesarrollo. Consideraciones cada vez más pragmáticas llevarían a los dirigentes gremiales a dar al presidente el beneficio de la duda en esta cuestión.

Una importante minoría militante dentro del peronismo y la clase obrera se resistiría a esta lógica práctica. Apoyados en la experiencia y los valores de la resistencia, denunciaron el compromiso con Frondizi. Esta posición se sostenía de una interpretación literal y selectiva de la ideología y la experiencia peronistas que no se remontaba al Perón de los contratos con la Standard Oil sino al de la privatización de los ferrocarriles de propiedad británica. Para esta minoría militante, además, la presencia del mismo Perón tenía una significación crucial como garantía de que el Estado no sería utilizado en perjuicio de los trabajadores y la nación. Esta oposición a Frondizi no elaboró una crítica fundamental de la estrategia desarrollista. Antes bien, perduró como un rechazo moral de su impacto y los asociados a ella y una insistencia en la importancia de los criterios sociales y morales para establecer las políticas estatales.

A menudo esta oposición sindical recibía el nombre de "línea dura". Si bien sentían que la lógica del desarrollismo los ponía cada vez más a la defensiva, los "duros" conservaron una mayoría formal dentro de las 62 Organizaciones durante los años de Frondizi. Sostenidos por la aspereza misma de las luchas de 1959 y 1960 y con frecuencia representantes de sindicatos particularmente afectados por la aguda recesión de 1960 y 1961, denunciaban con pasión a Frondizi. La línea dura creía que la participación en la negociación, el compromiso y la defensa de lo que se veía como una apuesta por el sistema implicaría inevitablemente la postergación para algún vago futuro de las aspiraciones fundamentales que habían sido la base de la lucha obrera desde 1955, sobre todo la vuelta de Perón. En rigor de verdad, la política de Frondizi, expuesta sin tapujos, consistía precisamente en divorciar a Perón del movimiento y en especial de su rama gremial. En definitiva, la solución que proponían los duros para contrarrestar esta amenaza era una insistencia en las virtudes subjetivas de la dureza, la intransigencia y la lealtad y en la fidelidad a quienes habían lu-



chado y sufrido y sobre todo a Perón. La línea dura era, en última instancia, más un estado de ánimo que una posición política articulada, y esto dio a un núcleo militante del sindicalismo peronista la capacidad de sobrevivir a la desilusión de los años siguientes.

La lógica del pragmatismo terminó por imponerse. El período posterior a 1959 se caracterizó por el crecimiento de cierta resignación y desmovilización que iba a ser el telón de fondo de un proceso de burocratización de los sindicatos. Esto implicaba un cambio en la relación entre los dirigentes y las bases y en las actitudes de los propios líderes sindicales. Varios factores explican este proceso. Muchos activistas estaban desocupados e incluidos en listas negras; otros simplemente habían abandonado la actividad gremial. Quienes persistían comprobaban a menudo que sus sindicatos eran lugares crecientemente hostiles. La democracia interna de facto que había caracterizado en general la lucha sindical luego de 1955 comenzaba a cambiar de manera dramática. El fraude electoral era cada vez



Delegación argentina a la reunión de la OIT. Desde la izquierda, Augusto Vandor (con bolso de mano blanco), Francisco Pérez Leirós, Guillermo Acuña Anzorena, ministro de Trabajo, Riego Ribas, Juan Carlos Loholaberry, José Alonso, Luis Angeleri y Máximo Castillo, 5-6-1961.

más frecuente. Ahora, las conducciones gremiales nacionales también ejercían un control mucho más férreo sobre los dirigentes fabriles locales. Este tipo de control estaba acompañado por la purga de activistas de base. Los convenios firmados en 1960 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas. Los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu.

En parte, este proceso se fundaba en cierto grado de corrupción personal. En este período aumentaron las oportunidades de enriquecimiento o simplemente de una vida más cómoda. En una carta a Perón, John William Cooke comentaba que “de ahora en adelante habrá más represión, más cárcel, más cachiporrazos. Pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno. En todos los ámbitos el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración práctica”. Pero el efecto de la corrupción personal en su sentido más literal no debe exagerarse. La mayoría de los dirigentes ahora tentados por esa “integración práctica” había surgido muy poco tiempo atrás de las luchas fabriles contra el régimen militar. No estaban separados de los activistas por años de disfrute de privilegios burocráticos. Augusto Vandor, el líder de los metalúrgicos, había dejado la planta de Philips apenas cinco años antes. A decir verdad, activistas y dirigentes compartían una experiencia común en la resistencia a los militares y a Frondizi. Los activistas reconocían en los líderes a hombres como ellos, con los mismos antecedentes, aspiraciones y debilidades. Además, muchos activistas locales formaban parte ahora de las jerarquías sindicales.

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir. Los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión. El Plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyó eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo, Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos. Además de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961, que

más frecuente. Ahora, las conducciones gremiales nacionales también ejercían un control mucho más férreo sobre los dirigentes fabriles locales. Este tipo de control estaba acompañado por la purga de activistas de base. Los convenios firmados en 1960 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas. Los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu.

En parte, este proceso se fundaba en cierto grado de corrupción personal. En este período aumentaron las oportunidades de enriquecimiento o simplemente de una vida más cómoda. En una carta a Perón, John William Cooke comentaba que "de ahora en adelante habrá más represión, más cárcel, más cachiporrazos. Pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno. En todos los ámbitos el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración práctica". Pero el efecto de la corrupción personal en su sentido más literal no debe exagerarse. La mayoría de los dirigentes ahora tentados por esa "integración práctica" había surgido muy poco tiempo atrás de las luchas fabriles contra el régimen militar. No estaban separados de los activistas por años de disfrute de privilegios burocráticos. Augusto Vandor, el líder de los metalúrgicos, había dejado la planta de Philips apenas cinco años antes. A decir verdad, activistas y dirigentes compartían una experiencia común en la resistencia a los militares y a Frondizi. Los activistas reconocían en los líderes a hombres como ellos, con los mismos antecedentes, aspiraciones y debilidades. Además, muchos activistas locales formaban parte ahora de las jerarquías sindicales.

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir. Los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión. El Plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyó eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo, Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos. Además de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961, que

condujeron a la primera renegociación general de los convenios desde principios de la década del 50, el presidente también tomó algunas medidas para cumplir su antigua promesa de devolver la CGT. En 1961, las 62 Organizaciones aceptaron compartir el poder con los no peronistas en una comisión de veinte miembros encargada de convocar un congreso reorganizador.

El pragmatismo institucional presentaba sus propios desafíos a los dirigentes sindicales. El papel cumplido por los sindicatos peronistas empezaba a mostrar numerosas facetas. Por un lado, era evidente que los gremios tenían que representar las necesidades institucionales de sus organizaciones y los intereses económicos de sus afiliados. Esto implicaba negociar con la patronal, el Estado y los sindicatos no peronistas. Al mismo tiempo, los gremios se habían convertido en la principal expresión del peronismo en la Argentina y, como tales, tenían a su cargo la negociación de las demandas del movimiento con otros actores del sistema político institucional. La proscripción legal del justicialismo político no hacía sino reforzar esta tendencia. Por último, los dirigentes sindicales debían negociar *dentro* del peronismo con otros sectores del movimiento. Luego de 1960, esto significaba esencialmente dos cosas. Por una parte, tratar con el conjunto de partidos neoperonistas que habían surgido con la intención de reclamar el legado político asociado al voto peronista. También significaba tratar con las diversas figuras políticas y organismos oficiales designados por Perón en diferentes momentos para hablar en su nombre y representar las necesidades políticas del movimiento.

La primera prueba real de la capacidad de los dirigentes sindicales para desempeñar eficazmente esos múltiples roles se produjo en las elecciones de mitad del mandato presidencial, en marzo de 1962. Dentro de la dirigencia sindical prevalecía la idea de que el peronismo debía intentar presentar sus propios candidatos en vez de seguir recurriendo a la táctica del voto en blanco de elecciones anteriores. Cualquier campaña justicialista dependería indudablemente de la capacidad de los sindicatos de movilizar a su electorado peronista. La pregunta crucial era quién sería el principal beneficiario de las recompensas. Las figuras del justicialismo político esperaban convencer a los sindicatos y a Perón de la necesidad de dar los

votos a los partidos neoperonistas. Los propios sindicatos estaban decididos a imponer una mayoría de candidatos de su sector. Aún más importante, el líder de los trabajadores textiles, Andrés Framini, iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El propio Perón era, a lo sumo, ambivalente con respecto a esta perspectiva. Una campaña electoral exitosa apoyada en los sindicatos confirmaría a éstos como un sector con poder de negociación dentro de la política argentina y los mostraría hasta cierto punto independientes de su control.

Para terminar, los sindicatos debían ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de su intervención directa en esa campaña. El propio Frondizi apostaba sin duda a limitar el éxito de cualquier participación peronista. Esto dejaría a los sindicatos, en particular, con pocas alternativas salvo seguir adaptándose a los movimientos del presidente. Éste advertía las probables implicaciones que tendría una victoria peronista en lo tocante a la respuesta de las Fuerzas Armadas. En rigor, contaba con esta amenaza implícita para convencer a los gremios de que no presentarían sus candidatos. A su juicio, los sindicatos también debían comprender lo que podrían perder si su participación electoral provocaba una respuesta militar.

Se trataba de un juego complejo, pero en definitiva los líderes sindicales de las 62 Organizaciones consideraron las elecciones como una oportunidad única para confirmar el peso del gremialismo tanto dentro del peronismo como en el sistema político argentino. Aun si los resultados de los comicios indu-



Andrés Framini se dirige al plenario de la CGT de La Plata para leer el mensaje que se proponía dirigir al pueblo de la provincia de Buenos Aires en carácter de gobernador. A su lado, Augusto Vandor y atrás Vicente Solano Lima, marzo de 1962.

efan a los militares a intervenir, los sindicatos se habrían establecido como una fuerza con la cual estaría obligado a negociar cualquier nuevo régimen. También otros cálculos entraban en sus consideraciones. Es indudable que la línea dura juzgaba la participación en las elecciones como una forma potencial de deponer a Frondizi. En las bases peronistas había asimismo un profundo deseo de votar candidatos justicialistas como un modo de protestar contra el gobierno frondizista. El resultado de los comicios fue una resonante victoria peronista; sus candidatos ganaron ocho de las catorce gobernaciones en juego, incluida la de la provincia de Buenos Aires. Frondizi anuló de inmediato las elecciones e intervino esas provincias, pero esto no fue suficiente para salvar su presidencia. El 29 de marzo, con apoyo militar, juró como primer mandatario el presidente provisional del Senado, José María Guido, que a continuación formó un gabinete decididamente antiperonista.

Las elecciones de marzo demostraron con claridad el nuevo estatus del sindicalismo peronista. Dentro del movimiento justicialista habían logrado imponer sus candidatos a otros sectores. En términos más generales, la expresión política de la clase obrera peronista estaría ahora muy atada al movimiento sindical. El líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante dentro del sindicalismo peronista —y por extensión dentro del peronismo en su conjunto— fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país, había sido en gran medida responsable de la organización de esa campaña. La victoria en las elecciones había sido posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la UOM y otros sindicatos peronistas. En la prensa y en el movimiento sindical, tanto amigos como enemigos comenzaban a utilizar con creciente frecuencia el término “vandorismo”.

LOS AÑOS VANDORISTAS: APOGEO DE LA BUROCRACIA SINDICAL

Augusto Vandor llegó a simbolizar el proceso de integración del aparato sindical al sistema político institucional argentino y su corolario de burocratización y uso creciente de métodos

autocráticos para controlar la vida interna de los sindicatos. El término “vadorismo” se convirtió en sinónimo de negociación, pragmatismo y aceptación de la *Realpolitik* que gobernó la sociedad y la política argentinas luego de 1955. Para los comentaristas políticos y el público en general, Vador personificó la transformación del peronismo y sus sindicatos, que pasaban de una postura de franco antagonismo con respecto al statu quo posterior a 1955 a una actitud de aceptación de la necesidad de acomodarse a él y encontrar un espacio dentro de sus límites. Políticamente, el vadorismo implicaba el uso del poder y la representatividad que los sindicatos debían a su posición de fuerza dominante dentro del peronismo —como único sector plenamente legal dentro del movimiento— a fin de negociar con otros “factores de poder”.

En términos mediáticos, la imagen de poder e influencia dentro del sistema se simbolizaba en las frecuentes conversaciones entre dirigentes gubernamentales y sindicales sobre cuestiones económicas y sociales. En un nivel informal, esta situación era reforzada por la reproducción constante de las abundantes consultas entre Vador y sus compañeros de la conducción sindical y políticos, dirigentes empresariales, sacerdotes y jefes militares. La imagen de un Vador en mangas de camisa y sin corbata que, en su carácter de dirigente sindical, entraba a la Casa Rosada o al Ministerio de Defensa, iba a convertirse en el elemento dominante del imaginario político de la Argentina de esa época. Continuamente reiterada por los medios, esta representación contribuyó a fortalecer la percepción de los sindicatos peronistas como una parte fundamental del sistema social y político. A su turno, los dirigentes gremiales se apresurarían a hacer suya esa imagen.

Había otras maneras de definir el vadorismo, menos neutrales desde el punto de vista emocional. Su lado más oscuro también era objeto de la atención. En este caso, la imagen proyectada recordaba el modelo de gangsterismo sindical norteamericano asociado a personajes como Jimmy Hoffa. También suscitaba la evocación del siniestro conspirador que intrigaba con potenciales golpistas en los pasillos del poder. Para los adversarios de Vador en el movimiento sindical —los duros a quienes había marginado de las 62 Organizaciones— y para aquellos que, dentro del movimiento en su conjunto, aún acu-

dían a personas como John William Cooke en busca de orientación estratégica, el líder metalúrgico llegó a personificar la traición al espíritu de la resistencia y la esencia de un peronismo obrero radical. Esta concepción sobreviviría al apogeo del poder del líder metalúrgico y encontraría expresión en una nueva generación de activistas peronistas más jóvenes que ingresarían en grandes oleadas al movimiento a fines de la década de 1960. También tendría vigencia en las formaciones guerrilleras responsables de su asesinato el 30 de junio de 1969.

La versión más atrapante de esta visión del vandomorismo fue la expresada por el escritor Rodolfo Walsh. Éste investigó un tiroteo producido en 1966 en la pizzería La Real, en Avellaneda, entre un grupo de activistas peronistas y un grupo de dirigentes de la UOM, incluido el propio Vandor. El violento enfrentamiento causó la muerte de dos de los activistas y de uno de los protegidos de Vandor, el joven líder metalúrgico Rosendo García. Walsh utilizó la investigación de este incidente para lanzar una denuncia más general sobre la naturaleza del vandomorismo tal como actuaba en la UOM y había afectado la vida de militantes como Domingo Blajaquis, Raimundo Villafior, su hermano Rolando y su compañero Juan Granato, todos ellos víctimas —sostendría Walsh— de las maquinaciones de Vandor esa fatídica noche en la pizzería. Aún más dramáticamente, Walsh afirmaría que García, protegido del jefe de la UOM, no había muerto por las balas de los activistas sino como parte de un complot deliberado del líder sindical para eliminar a un potencial rival más joven dentro del grupo de conducción. Su visión de Vandor y el vandomorismo como un ejemplo de corrupción política y moral se publicó originalmente en una serie de artículos periodísticos, luego aparecidos como libro con el título de *¿Quién mató a Rosendo?*, que alcanzó gran circulación.

¿Cuál era entonces la base del poder de esta dirigencia sindical? En un nivel elemental, el poder de cualquier sindicato dependía en la Argentina de la facultad que la ley 14.455 asignaba al gobierno para otorgar personería gremial a un solo sindicato por rama industrial, lo cual aseguraba a éste el derecho a conducir las negociaciones en esa actividad laboral. La ley también regulaba la mayor parte de los demás aspectos del funcionamiento sindical. Si bien admitía una estructura fede-

rativa de organización gremial, en la práctica los sindicatos más grandes e importantes del país tenían estructuras sumamente centralizadas que concentraban el poder en una única dirigencia de nivel nacional. Estos sindicatos tenían un control casi total sobre las actividades de sus ramas y seccionales. En los hechos, ni siquiera los sindicatos que tenían una estructura federal formal garantizaban la autonomía de sus seccionales con respecto al control centralizado. La ley laboral autorizaba a las federaciones a imponer estatutos que disciplinaban severamente a los sindicatos afiliados y limitaban su capacidad de actuar de manera independiente de la federación. Así, la Ley de Asociaciones Profesionales no sólo garantizaba a las dirigencias gremiales el derecho a negociar, sin temer la competencia de sindicatos rivales, sino que también sentaba las bases de una estructura sindical que contribuía en mucho a asegurar el control centralizado *dentro* de un sindicato.

Otro motivo crucial del poder y la influencia de la conducción era el manejo de las finanzas. También en este caso los fundamentos procedían de la ley. Las finanzas gremiales tenían dos fuentes esenciales: la cuota sindical y la cuota asistencial, prevista para el mantenimiento de los diversos servicios sociales ofrecidos por los sindicatos. Una tercera fuente era la cuota empresarial, pagada por la patronal como un aporte a los fondos gremiales para el bienestar social. Por último, había cuotas extraordinarias negociadas en los convenios, que por lo común eran un porcentaje del primer salario quincenal pagado al comenzar un nuevo contrato. La Ley de Asociaciones Profesionales establecía un sistema de retención automática de estas diferentes cuotas, de la que se encargaban los empleadores. Dada la preponderancia de un tipo de estructura gremial centralizada, este sistema proporcionaba grandes recursos económicos a la dirigencia sindical. En términos esenciales, significaba que en los grandes sindicatos industriales y de empleados administrativos la cuota del afiliado metalúrgico de Córdoba, el trabajador de la carne de Rosario o el ferroviario de Tucumán era deducida por sus empleadores y depositada directamente en la cuenta bancaria del sindicato central en Buenos Aires. Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que el valor total de los bienes de propiedad sindical en la actividad manufacturera se calculaba en casi 600.000 millones de